



## **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**

Medellín, nueve (09) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

En el presente proceso, el apoderado de la demandante mediante memorial enviado por correo electrónico el pasado 07 de marzo, solicita “...se emita fallo de segunda instancia o se declare perdida de competencia para continuar con el proceso...”, invocando el artículo 121 del Código General del Proceso.

Al respecto, debemos señalar que para el Despacho el citado artículo, no tiene aplicación en materia laboral, ya que no se enmarca dentro de la remisión que dispone el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pues los esquemas normativos procedimentales de la especialidad civil y laboral presentan diferencias que no permiten la analogía en el punto propuesto, esto es, en la forma de realización de audiencias y en su trámite tanto de la primera como de la segunda instancia.

La controversia que ahora se plantea, ya ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia en sentencia STL 1523 de 17 de febrero de 2021, con ponencia de la Doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo, en la que se expuso:

...Acorde con el criterio fijado por esta Sala de la Corte, entre otras, en sentencias CSJ STL5866-2018, CSJ STL7976-2018, CSJ STL 16122-2018, CSJ STL 4698-2019, CSJ STL 14036-12019, CSJ STL 15397, CSJ STL 16084-2019 y CSJ STL 16474-2019, según el cual el artículo 121 del Código General del Proceso no es aplicable al procedimiento laboral por cuanto esta especialidad tiene sus propias disposiciones que regulan la materia...

Posición reiterada en la sentencia SL1163 del 30 de marzo de 2022, en la que se indicó:

1. Sobre la referida acusación, haciendo la salvedad de que sí es posible acusar la infracción directa por la vía indirecta (CSJ SL 1039-2020), la Sala considera que el Tribunal no incurrió en la infracción directa de los arts. 117 y 121 del CGP, comoquiera que estas disposiciones no son aplicables al procedimiento laboral, toda vez que no se dan los supuestos del art. 145 del CPTSS para acudir por analogía a la aplicación de tales preceptos, ya que el Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social tiene su propia regulación para garantizar a toda persona su derecho «...a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter» (nl. 1° del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

Sin el ánimo de ser exhaustivos en relacionar todos los mecanismos adecuados que

prevé el procedimiento del trabajo y seguridad social para brindar las debidas garantías judiciales a las partes, a manera de ejemplo, se rememora que el art. 48 del CPTSS prevé que el juez asumirá la dirección del proceso, adoptando las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en su trámite. Igualmente, los arts. 30 y 71 ibidem prevé lo que debe hacer el juzgador en caso de que una o ambas partes sean contumaces. Además, está previsto que las actuaciones procesales y la práctica de pruebas en las instancias se llevarán a cabo oralmente, en audiencia pública, so pena de nulidad, art. 42, ibidem.

**En fin, el procedimiento del trabajo y seguridad social tiene sus propios mecanismos adecuados para ofrecer a las partes las garantías judiciales debidas, por lo que no se debe acudir a los arts. 117 y 121 del CGP, puesto que no hay un vacío legal que deba suplirse con estas disposiciones, en tanto que el art. 145 del CPTSS solo autoriza acudir al Código General del Proceso a falta de disposiciones en la especialidad. Inclusive, el mismo art. 1 del CGP reconoce que ese código regula la actividad procesal «en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios» y que se puede aplicar a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, «en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes».**

Además, la Sala considera que el legislador, en ejercicio de su libertad de configuración legislativa, puede adoptar distintas medidas que sean adecuadas para brindar a toda persona las garantías judiciales debidas, atendiendo la especialidad de los derechos sustanciales que van a ser objeto de adjudicación por parte de los jueces, por lo que no necesariamente debe hacerlo de igual forma en todos los casos.

En ese orden, si dentro del proceso laboral y de seguridad social no existe una regla similar al art. 121 del CGP, ello no significa necesariamente que hay una laguna normativa que deba suplir el juez, puesto que el legislador tiene adoptados otros mecanismos que sirven para la misma finalidad, según la especialidad del derecho, como son los previstos en el procedimiento laboral y de la seguridad social.

**La pérdida de competencia del juzgador por no dictar la sentencia dentro de un plazo razonable que prevé el art. 121 del CGP no es la única forma de hacer efectivos los principios de celeridad y la garantía del plazo razonable, inclusive, puede llegar a ser contraproducente, como lo previó la misma Corte Constitucional en la Sentencia C-443-2019, cuando analizó el alcance del artículo 121 del CGP y declaró inexecutable la expresión «de pleno derecho» contenida en el inciso sexto de dicho artículo y la exequibilidad condicionada del resto de este inciso, en el entendido de que «...la nulidad allí prevista debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, y de que es saneable en los términos de los artículos 132 y subsiguientes del Código General del Proceso».**

Resta decir que la Sala no desconoce la sentencia del Corte Constitucional T-334-2020 donde adocrinó que el art. 121 del CGP sí es aplicable al procedimiento laboral y de seguridad social, sin embargo, por las razones antes expuestas, no comparte esa postura, y la misma solo produce efectos inter partes.

Así las cosas, no pudo incurrir el sentenciador de segundo grado en infracción directa de los arts. 117 y 121 del CGP, **puesto que esos preceptos no aplican al proceso del trabajo y de la seguridad social**. Vale recordar que para la prosperidad de una acusación por infracción directa de la ley, es indispensable que la norma acusada sea la que regule la controversia, pues de lo contrario, el cargo está condenado al fracaso, CSJ SL1269-2017.”

Ahora, no se desconoce que la Corte Constitucional en sentencia T-334 de 2020, encontró procedente la aplicación del mandato en comentario en materia laboral, empero ello fue dentro de un trámite de tutela, cuyos efectos “*inter partes*” permiten a esta operadora judicial apartarse de la decisión, y porque si en gracia de discusión se aceptará tal postura, ella no es de aplicación objetiva, ya que el transcurso del tiempo no llevaría a un juzgador a perder competencia de los asuntos sometidos su decisión, sin analizarse las particularidades del caso y los múltiples factores que se puedan presentar, en los que se incluye la congestión judicial, advirtiendo que, en materia laboral, el sistema procesal es bastante garantista con las providencias a ser consultadas, lo que implica revisar en segundo grado todas las sentencias

adversas a la nación en su sentido amplio, entidades en que esta sea garante, los trabajadores y los afiliados al sistema de seguridad social integral, a más del trámite de las apelaciones, lo que crea de por sí un desequilibrio de las cargas laborales que no permiten igualar en trato procesal entre la especialidad civil y la laboral.

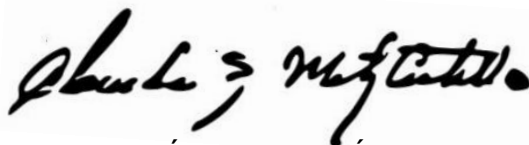
Por otro lado, se le informa a la parte, que conforme al turno de llegada del proceso y las previas solicitudes de priorización elevadas por los varios usuarios del Despacho se deben resolver primero los procesos anteriores al que refiere la presente petición, ello sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 446 de 1998 que permiten las sentencias por unidades temáticas.

El presente proceso fue repartido al despacho el 08 de marzo de 2022, ya se encuentra admitido el recurso y se dio traslado para presentar alegaciones mediante auto del 22 de agosto de 2022, razón por la que se encuentra próximo a proferir decisión.

Conforme con lo expuesto, NO SE ACCEDE a la solicitud elevada por el apoderado de la parte actora en el sentido de abstenerse de seguir conociendo la actuación según la regla establecida en el artículo 121 del Código General del Proceso.

Notifíquese

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO  
Magistrada

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL  
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE  
CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N° 042  
del 10 de marzo de 2023

**consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>